

## 2019-00013 Alegatos de conclusión de primera instancia.

Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Vie 31/03/2023 15:26

Para: Juzgado 09 Administrativo - Nariño - Pasto <adm09pas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: informes <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Catherine Andrea Pineda Molina <cpineda@gha.com.co>

 1 archivos adjuntos (380 KB)

2019-00013 Alegatos de conclusión.pdf;

Señores

**JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE PASTO - NARIÑO**

E.S.D

<b>REFERENCIA:</b>	<b><u>ALEGATOS DE CONCLUSIÓN - PRIMERA INSTANCIA</u></b>
<b>RADICADO:</b>	<b>52001-3333-009-2019-00013-00</b>
<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	<b>REPARACIÓN DIRECTA</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>LAURENTINO MARTOS NAVÁEZ Y OTRO</b>
<b>DEMANDADO:</b>	<b>MUNICIPIO TAMINANGO Y OTROS</b>
<b>LLAMADO EN GARANTÍA:</b>	<b>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – ENTIDAD COOPERATIVA</b>

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con cédula de ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C. S. de la J., actuando en mi calidad de apoderado de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – ENTIDAD COOPERATIVA**, mediante el presente escrito procedo a **REASUMIR** el poder a mi conferido en el proceso de la referencia, y a presentar dentro del término legal, los **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**; solicitando desde ya, se profiera sentencia anticipada favorable a los intereses de mi representada, negando las pretensiones de la demanda por haber operado la caducidad del medio de control y así mismo, no demostrarse la responsabilidad administrativa que se pretendía endilgar a la demandada **MUNICIPIO DE TAMINANGO** y a mi prohijada, de conformidad al memorial adjunto.

Cordialmente,

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA,**

C.C. No.19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.

Señores

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE PASTO - NARIÑO

E.S.D

REFERENCIA: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN - PRIMERA INSTANCIA  
RADICADO: 52001-3333-009-2019-00013-00  
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA  
DEMANDANTE: LAURENTINO MARTOS NAVÁEZ Y OTRO  
DEMANDADO: MUNICIPIO TAMINANGO Y OTROS  
LLAMADO EN GARANTÍA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – ENTIDAD COOPERATIVA

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con cédula de ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C. S. de la J., actuando en mi calidad de apoderado de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – ENTIDAD COOPERATIVA**, mediante el presente escrito procedo a **REASUMIR** el poder a mi conferido en el proceso de la referencia, y a presentar dentro del término legal, los **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**; solicitando desde ya, se profiera sentencia anticipada favorable a los intereses de mi representada, negando las pretensiones de la demanda por haber operado la caducidad del medio de control y así mismo, no demostrarse la responsabilidad administrativa que se pretendía endilgar a la demandada **MUNICIPIO DE TAMINANGO** y a mi prohijada, con fundamento en los siguientes argumentos que concretaré en los acápites siguientes.

#### **CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD DEL ESCRITO**

El día 21 de marzo de 2023 se celebró audiencia inicial en la cual se corrió traslado por el término común de diez (10) días hábiles, contados a partir del día a siguiente a la celebración de la audiencia, es decir, entre los días comprendidos entre el 22,23,24,27,28,29,30,31 de marzo, 10 y 11 de abril de 2023, teniendo en cuenta la vacancia judicial por Semana Santa, para que las partes presentaran alegatos de conclusión, con el fin de dictar sentencia anticipada de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, en atención a la prosperidad de la excepción previa de caducidad propuesta por la llamada en garantía. Por lo anterior, este escrito de alegatos es presentado dentro del término previsto para el efecto.

#### **CAPÍTULO II. FRENTE A LO PROBADO EN EL PROCESO**

##### **SE ACREDITÓ QUE OPERÓ LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL**

De acuerdo al material probatorio obrante en el plenario, a través del cual fue posible determinar que en el presente caso operó la caducidad del medio de control, de tal suerte que, sin adentrarnos a revisar la antijuridicidad del daño aquí alegado y sólo para explicar las circunstancias en que se configuró la caducidad, resulta necesario hacer alusión a la naturaleza del daño y la forma en que debió computarse el término de la acción.

Lo primero que debe considerarse es que en atención a los documentos allegados con la presentación de la demanda, el supuesto daño alegado por los demandados fue ocasionado en virtud de la ejecución del contrato de obra pública Nro. 00-LP.2014, celebrado entre El Municipio de Taminango y la empresa Americana de Construcciones E.S., en el que se estableció una duración de seis meses (06), comprendidos entre el 03 de febrero de 2015, fecha en que se suscribió el

precitado contrato y 06 de septiembre de 2016, fecha en la que se **terminaron** las obras por parte de la constructora.

De acuerdo a la narración de los hechos realizada por los demandantes, puede concluirse que estos tuvieron pleno conocimiento que con el inicio de la obra surgieron presuntamente los supuestos daños en su inmueble, de allí que, si hubiera existido un daño, el mismo sería de naturaleza instantánea y lo que ocurrió respecto a los estancamientos de agua, proliferación de insectos y demás, fue una agravación de dicho daño, pero en ningún caso, podría indicarse que se trató de un daño continuado, tal y como lo ha manifestado el Consejo de Estado en reiterados pronunciamientos:

*17.16. El adelantamiento de las obras que permitieron el discurrir de las aguas negras hacia el predio de los actores constituyó el hecho generador del daño, **concretado con la culminación de esos trabajos**, y que provocó la contaminación de las aguas que pasaban por los predios de los actores, la cual fue advertida por los afectados, cuando menos, a partir de 1991, según se acreditó. **Cosa distinta es que los daños generados con esa obra pública hayan perdurado en el tiempo**, en tanto la construcción adelantada en 1990 continuó, en adelante, permitiendo el paso de aguas residuales. Con todo el evento lesivo fue uno solo y perfectamente identificable: la construcción de las obras.*

*17.17. Así las cosas, aunque en forma posterior continuaron evidenciándose los efectos lesivos de esa construcción que permitió el paso de aguas negras hacia la finca de los actores, tales como el informe técnico del mes de febrero de 2002, emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental de la CVC, donde luego de practicarse una visita al predio “El Desierto”, donde se corroboró que las aguas residuales del Municipio de Guadalajara de Buga se vertían al canal de drenaje del proyecto Tiacuente-El Conchal y eran conducidas por el zanjón Burriá “Inundando parte del predio El Desierto y contaminando a su vez los terrenos de dicho predio; o la inspección judicial realizada por el Juzgado 2° Administrativo de Buga-Valle el 29 de marzo de 2007 al predio “El Desierto”, en la que se constató que a esa fecha aún la acequia Tiacuante llevaba aguas negras y se percibían malos olores, lo cierto es que tales sucesos solo consistieron en la verificación de los efectos lesivos y continuación en el tiempo, pero, según se probó, el daño había sido causado y advertido por los afectados muchos antes.<sup>1</sup>*

En este orden de ideas, no existe duda que el supuesto daño reclamado por los demandantes fue instantáneo “o al menos ocurrió dentro de un intervalo de tiempo claro, entre la fecha que dio punto de partida al inicio de la obra y se concretó con la terminación de las mismas”, siendo está la segunda circunstancia que debe analizarse, como quiera que teniéndose claridad de la fecha en que terminaron las obras, es a partir de allí que deben computarse los términos para incoar el medio de acción de reparación directa, tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado:

(...)

*La premisa para este tipo de casos es que una obra pública puede producir perjuicios instantáneos, por ejemplo, el derrumbamiento de un edificio aledaño (...) En el primer evento (perjuicio instantáneo) el término de caducidad es fácil de detectar; tan pronto se ejecute la obra empezará a correr el término para accionar. Para una mayor certeza la jurisprudencia de la Sala ha señalado como fecha inicial, **aquella en que la obra quedó concluida**. (Énfasis añadido)<sup>2</sup>*

*(...) La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido unánime en señalar que para contar este término de caducidad pueden existir dos momentos: **i) cuando termina la obra, entendiendo que los perjuicios son de naturaleza instantánea, es decir, que se originan y son de conocimiento del afectado en plena realización de la obra;** y ii) cuando se trata de daños periódicos, esto es, que se tiene conocimiento del hecho dañoso pero este no coincide con la ejecución de la obra, situación que solo es aplicable a los casos en que tiempo después de la terminación de la obra se advierten las afectaciones que pudo causar.<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Sección Tercera-Subsección B, Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero, Radicado No. 76001-23-31-000-2003-02005-02 (46438), Actor Yolanda Roldán Medina y otros, providencia del 02 de agosto de 2019.

<sup>2</sup> Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 1/10/2014, expediente 33767.

<sup>3</sup> Tribunal Administrativo de Casanare, providencia del 29/08/2019, Radicado Nro. 85001-33-33-001-2018-00360-01

En este orden, existe plena certeza que el término para computar la caducidad de la acción debe realizarse a partir del día siguiente del acaecimiento del daño, para el presente caso, a partir de la terminación de las obras adelantadas por la constructora, es decir, a partir del 06 de septiembre de 2016, de allí que al revisar la fecha de presentación de la demanda es posible determinar que había fenecido el término para tal acción, incluso con la suspensión que acarreo la solicitud de conciliación, como más adelante se precisa.

Pese a todos los argumentos expuestos, en los que ratificamos la solicitud de declarar la caducidad de la acción, también es cierto advertir que el Consejo de Estado ha sostenido que en muchos casos el acaecimiento del daño no siempre coincide con la fecha de conocimiento del mismo, en ese evento, deberá computarse el término para la caducidad, a partir del momento en que la víctima manifiesta haber conocido el hecho dañoso.

Si fuera esta la postura que decide adoptar el despacho, debe precisarse que los demandantes tuvieron conocimiento del daño desde el 4 de octubre de 2016, fecha en la que a través de apoderada judicial radican una solicitud ante la Alcaldía del Municipio, en los siguientes términos:

(...)

Taminango, Octubre 06 de 2016

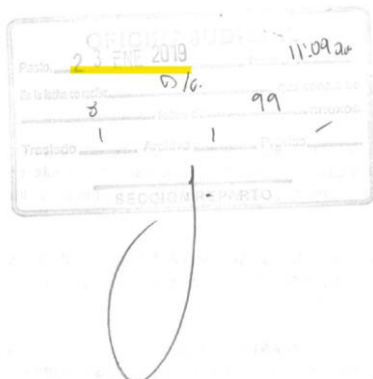
Señor:  
LAURENTINO MARTOS NARVAEZ  
C.C. No. 15.845.114 del Rosario (Nariño).  
Residente Corregimiento Remolino

Ref. Respuesta Derecho de petición.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta su Petición radicada en despacho general el día 4 de Octubre del presente año, donde manifiesta: "...se realice una inspección ocular a la casa de residencia del señor Laurentino Martos, la cual ha sufrido agrietamientos y hundimiento considerables por casusa de las aguas servidas sin conectar a la red principal de alcantarillado de puerto remolino que viene desde el restaurante escolar de la I.E. Agropecuaria el Remolino."; Se Solicita a vivienda.....la cual ha sufrido agrietamientos y hundimiento considerable por causa de las a se informa que:

Es claro entonces que en este evento, los demandantes tuvieron conocimiento del daño en la fecha antes señalada, por lo que el término de caducidad debería ser computado desde el 05 de octubre de 2016 y en ese orden, la fecha máxima para presentar la correspondiente demanda en principio sería hasta el 05 de octubre de 2018, sin embargo, dicho término fue suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación el 26 de octubre de 2017 y la certificación de la misma fue expedida el 22 de enero de 2018, de tal suerte que el termino de caducidad se reanudo hasta el 28 de diciembre de 2018, día no hábil, por lo que debió el demandante presentar la presente acción a más tardar el 11 de enero de 2019, no obstante el escrito de demanda fue radicado sólo hasta el 23 de enero de dicha anualidad.



Quiere decir lo anterior, que incluso si no se tuviera como fecha de terminación el 6 de septiembre de 2016, fecha en la que cesaron las obras por parte de la constructora, es claro que los demandantes tuvieron conocimiento de los daños que alegan sufrió su propiedad, desde el inicio de la obra y así mismo lo dieron a conocer a la Administración en la fecha antes señalada (4/10/2016), situación que conforme a los argumentos antes expuestos y en cualquiera de las circunstancias antes descritas, se configuró la caducidad de la presente acción y en se sentido, ruego al Despacho dictar sentencia anticipada, desestimando las pretensiones de la demanda.

#### **CAPÍTULO IV. PETICIÓN**

En mérito de lo expuesto, de manera respetuosa, solicito al Despacho dictar sentencia anticipada, negando todas y cada una de las pretensiones de la demanda, declarando probada la caducidad de la acción.

#### **CAPÍTULO V. NOTIFICACIONES**

Al suscrito, en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 oficina 212 de la Ciudad de Cali (V), correo electrónico: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**  
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá  
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.